



"2022: Año de Ricardo Flores Magón"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO

OFICIO 12701/2022-P-III

27580

cl. y testimonio
C/A Copias
4 Anexos exp.
1069-20 en
bros. Tomos y un sobre
con fotos físicas
y fotos electrónicas
G. J. J. J. J.

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
PRUEBAS.

JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
PRESENTE.

RECEBIDO

SEP-9 A 9 00

Por vía de notificación y para los efectos legales correspondientes,
remito a usted testimonio de la resolución pronunciada por este Tribunal
Colegiado en el amparo en revisión 100/2022, derivado del juicio de
amparo indirecto 1069/2020, de su índice, promovido por

También acompaño un CD que contiene las constancias
electrónicas relativas al procedimiento administrativo P.A. [REDACTED] así
como tres legajos de pruebas certificado relativo al procedimiento
administrativo [REDACTED] y siete copias de la resolución, sin que sea
necesario acusar de recibo, toda vez que el sello de recepción, hace las
veces de acuse.



Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil
veintidos

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

- ANEXOS:
- 1 CD
 - 3 LEGAJOS
 - 1 TESTIMONIO.
 - 7 COPIAS DE LA RESOLUCIÓN.

[Firma]
Jefe de Oficina

511
JEFATURA DE PARTES COMÚN
RECEBIDOS DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA
Materiales de la
Materiales de la
con 2 copias
EXP. 1069-2020 en
un sobre con dos discos





QUEJOSO:

QUEJOSO; DIRECTOR GENERAL
DE RESPONSABILIDADES Y
VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA; AGENTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA
FEDERACIÓN ADSCRITO AL
JUZGADO DE DISTRITO

PROVIENE:
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN
LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADO RELATOR:
JUAN CARLOS GUZMÁN ROSAS

SECRETARIO:
JAIR SANDOVAL JIMÉNEZ

Ciudad de México. [REDACTED] del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de uno de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Y

RESULTANDO:



SENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FUNDAMENTAÇÃO
ID. O.

但 A

Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, En [redacted], por derecho propio, promovió juicio de amparo contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican.

5

1. El Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores).
2. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
3. El Secretario de Gobernación.
4. El Director de Verificación Patrimonial A, adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones, de la Secretaría de la Función Pública.
5. El C. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública.

on the
s
an

1. Del Congreso de la Unión se reclama la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, particularmente por lo que hace a sus artículos 36, 37, 38 y 39.
2. Del Presidente de la República se reclama la promulgación y publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, particularmente por lo que hace a sus artículos 36, 37, 38 y 39.

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

3. Del Secretario de Gobernación se reclama el refrendo y publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, particularmente por lo que hace a sus artículos 36, 37, 38 y 39.

4. Del C. Director de Verificación Patrimonial A, adscrito a la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial, de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones, de la Secretaría de la Función Pública, se reclama la resolución de fecha 29 de septiembre de 2020, dentro del expediente VP/064/2019 correspondiente al procedimiento de verificación de la evolución patrimonial del suscrito, mediante la cual considera que el suscrito presenta un presunto incremento en su patrimonio que no es explicable o justificable de acuerdo a las razones que ahí señala.

5. Del C. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública se reclama la ejecución del acuerdo dictado por el Director de verificación Patrimonial A, anteriormente señalado.

SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo.

Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por auto de tres de diciembre de dos mil veinte, la radicó con el número de juicio de amparo 1069/2020 y la admitió parcialmente a trámite.

Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno admitió la ampliación de demanda respecto de las autoridades y actos siguientes.

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

C. Director General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, por el dictado de la resolución de fecha 04 de diciembre de 2020, dentro del procedimiento administrativo 73/2020 derivado del expediente de verificación patrimonial VP/064/2019, tanto por vicios propios, como por ser acto de aplicación de la norma impugnada.

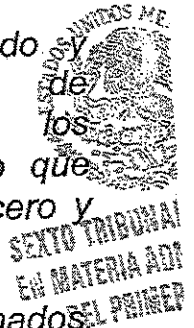
Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados y Senadores) por la expedición de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, particularmente por lo que hace al artículo 13, fracción V, párrafos tercero y quinto.

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por la promulgación y publicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, particularmente por lo que hace al artículo 13, fracción V, párrafos tercero y quinto.

Secretario de Gobernación, por el refrendo y publicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, particularmente por lo que hace al artículo 13, fracción V, párrafos tercero y quinto.

Directora de Registros de Sancionados, dependiente de la Coordinación de Registro Patrimonial, de Intereses y de Servidores Públicos Sancionados de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflicto de Intereses de la Secretaría de la Función Pública, a quien se le reclama la inminente inscripción de la resolución reclamada en el Registro Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos Sancionados.

Sustanciado el procedimiento, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, celebró la audiencia





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-A-65

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

constitucional y el dos de febrero de dos mil veintidós emitió sentencia en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo.

TERCERO. Recursos de revisión.

Contra la sentencia, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en el juzgado de distrito, la parte quejosa y el Director General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública interpusieron recurso de revisión, de los que correspondió conocer a este tribunal colegiado.

Por auto de presidencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se registró el primero de los medios de impugnación, interpuesto por el representante social de la federación, con el expediente de amparo en revisión **100/2022**.

Mediante acuerdo de presidencia de once de abril de dos mil veintidós, se admitieron los recursos hechos valer por el quejoso y por el titular de la Director General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.

Pais Saudovael Financiaz
70.66, 70.70, 74.65, 83.03, 00.00, 00.00, 09.09, 00.00, 00.00, 09.09, 09.09
06/07/21 12:53:35

CUARTO. Turno.

En proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, se turnaron los autos a la ponencia del magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas, para la formulación del proyecto respectivo; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia.

Este tribunal es competente para conocer del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción I, inciso e), 84 de la Ley de Amparo y 38, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se recurre una sentencia emitida por un juzgado de distrito en materia administrativa, que reside en el territorio en que este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Legitimación.

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Los medios de impugnación son interpuestos por parte legítima, esto es, el quejoso por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por la autoridad responsable Director General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, a través del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública quien cuenta con facultades para su representación y por el agente del Ministerio Público de la Federación.

TERCERO. Oportunidad.

El medio de impugnación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de distrito se interpuso dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que la sentencia se notificó vía electrónica el **tres de febrero de dos mil veintidós**, mientras que su oficio de expresión de agravios se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el **dieciocho de febrero del año en curso**, esto es, al noveno día hábil, descontando en el cómputo los días doce y trece del mismo mes y año, por haber sido inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Los recursos interpuestos por la autoridad y el quejoso también son oportunos, pues la sentencia recurrida se les notificó el **cuatro y diecisiete de febrero de dos mil veintidós**, respectivamente, mientras que su oficio y escrito de expresión de agravios se recibieron en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México el **veintiuno de febrero siguiente**, esto es, al décimo y primer día hábil, descontando en el cómputo los días doce, trece, diecinueve y veinte del mismo mes y año, por haber sido inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



CUARTO. Estudio agravios del quejoso.

En el considerando cuarto el juez resolvió que, respecto del acto reclamado consistente en la emisión de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veinte en el procedimiento administrativo VP/064/2019, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022**
SENTENCIA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo por haberse suscitado un cambio de situación jurídica.

Ello, porque en la resolución reclamada inicialmente sólo se determinó que el quejoso presentó un incremento presunto en su patrimonio que no era explicable ni justificable, razón por la que la investigación fue enviada a la autoridad para que resolviera y, durante el trámite del juicio de amparo, ésta emitió la resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que resolvió que el quejoso es responsable administrativamente y le impuso la sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o comisiones en el servicio público por el término de diez años.

Por esas circunstancias el juez consideró que debía aplicarse la causa de improcedencia en comento, pues al provenir de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, durante la sustanciación del juicio de amparo, se emitió un acto nuevo que cambió su situación jurídica, lo cual le impedía resolver sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso creada por la última de las resoluciones.

Conclusión que implicó que tampoco emprendiera el estudio de constitucionalidad de los

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

artículos 36, 37, 38 y 39 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que fueron reclamados a partir de su primer acto de aplicación que fue la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, emitida en el procedimiento administrativo [REDACTED] por lo que debía hacerse extensivo el sobreseimiento.

Precisó que esas disposiciones normativas no fueron aplicadas en la resolución emitida con posteridad a la conclusión de la investigación, ya que se sustentó en los artículos 36, 38 y 44 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos por ser la aplicable al momento en que sucedieron los hechos que se le imputan al quejoso.

Para combatir esa decisión, en una parte de su escrito de agravios, el quejoso argumenta que es equivocado que dichos actos se consumaron de forma irreparable al haberse agotado el procedimiento de investigación y al emitirse la resolución en el procedimiento administrativo [REDACTED]

Explica que, si se parte de la lógica del juez, que el procedimiento en el que se emitieron los actos reclamados se siguió en forma de juicio, es posible que se revise la constitucionalidad de las determinaciones

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022**
SENTENCIA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

emitidas en él y las normas en las que se fundamentan, al haber trascendido a la última de las resoluciones reclamadas, por lo que no puede entenderse que las violaciones combatidas originalmente se consumaron de manera irreparable.

Señala lo anterior, porque la imposición de la sanción no es el único perjuicio que le causaron los actos reclamados, dado que la primera autoridad demandada determinó en el procedimiento administrativo VI 7664/20 que no había justificado el patrimonio de su esposa y la segunda de las autoridades, en el diverso [REDACTED] resolvió lo contrario, que ese patrimonio sí estaba justificado; por lo que si sólo se declara la inconstitucionalidad de la sanción, pero no se resuelve el tema de la justificación del patrimonio, queda sin resolverse la parte medular de la *litis* que planteó en el juicio de amparo.

Para dar solución a ese planteamiento conviene tener en cuenta que el acto reclamado inicialmente consistió en el acuerdo de conclusión de veintinueve de septiembre de dos mil veinte emitido por el Director de Verificación Patrimonial A, adscrito a la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y

Jair Sandoval Jilmeret,
70.63.66.20.20.74.6.5.00.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
08/07/23 12:53:35

En esa determinación el director en comento detalló que el quejoso [REDACTED] presentó un incremento en su patrimonio por un monto total de \$35'735,114.29 que no fue explicable o justificable como servidor público en los cargos de Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y Secretario de Desarrollo Social del periodo del uno de diciembre de dos mil doce a diez de enero de dos mil dieciocho; por tanto, ordenó el envío del expediente indicado a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública para que determinara lo que en derecho corresponda.

12



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022 SENTENCIA

Este tribunal advierte que dicha resolución reclamada, al ser un acto intraprocesal que no es de imposible reparación, no puede tenerse como acto de ~~destacado~~ ser la resolución final; sin perjuicio que las violaciones que el quejoso aduce sean analizadas como violaciones procesales.

El artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo establece:

Artículo 107. El amparo indirecto procede:

[...]

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al ~~recurso~~ de la resolución; y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

De la norma transcrita se desprende que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra los actos procesales que se emitan dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; sólo procede contra la resolución

100



Fig. 1

100

1

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

acto que posibilitaría la procedencia del juicio de amparo indirecto será la propia resolución definitiva, tal como se establece en el inciso a) de la norma legal en consulta.

Caso en el que, si se estima que durante el procedimiento existieron actos ilegales, esto puede ser materia de los conceptos de violación, pero desde luego, técnicamente no pueden tenerse como actos reclamados destacados cuando ya se emitió la resolución que ponga fin al procedimiento.

Si se tiene en cuenta que el auto de inicio del procedimiento y todo lo actuado con posterioridad son actos procesales del procedimiento administrativo que culminó con la emisión de una resolución sancionatoria, el único acto que propiamente debe tenerse como reclamado en el juicio es esa **resolución definitiva**.

En consecuencia, en el caso particular, toda vez que la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veinte no es de imposible reparación, ya que sólo hizo del conocimiento de las autoridades que el quejoso presentó un incremento presunto en su patrimonio y que con ello se agotaba la fase de investigación para los efectos conducentes en el procedimiento de responsabilidad administrativa, su

JAN SACHSWEI, MONTREAL
30.6u,66.20,20.74,65.00,00.00,00.00,09.00,00.00,00.00,09.3h
08/07/23 12:53:33

Por tanto, sólo puede ser acto destacado la resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, emitida en el procedimiento [REDACTED] y su ejecución, por ser ésta la que eventualmente le depara algún perjuicio, ya sea por violaciones cometidas durante el procedimiento o en la propia resolución.

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN".

16

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

de la Función Pública consistente en la inminente inscripción de la resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, emitida en el procedimiento administrativo [REDACTED], el juez aplicó la causa de improcedencia [REDACTED] del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, porque el promovente no formuló conceptos de violación.

El quejoso alega que es incorrecto que el juez haya sobreseído en el juicio por dicho acto, por no haber expresado la causa de pedir, pues al tratarse de una autoridad ejecutora no es necesario expresar concepto de violación, ya que la constitucionalidad del acto de ejecución depende de la decisión que se tome de la resolución impugnada, sobre todo si no lo reclamó por vicios propios.

A efecto de dar solución a ese planteamiento, se parte que en el resolutivo tercero de la resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte la autoridad sancionadora ordenó notificar esa decisión a la Directora de Registro de Sancionados dependiente de la Coordinación de Registro Patrimonial, de Intereses y de Servidores Públicos Sancionados de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflicto de Intereses de la Secretaría de la Función Pública para

JEFF SANDROYAL DIRECTOR
 741.63.66 20.20 74.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
 08/07/23 12:53:35

JEFF SANDROYAL DIRECTOR
 741.63.66 20.20 74.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
 08/07/23 12:53:35

JEFF SANDROYAL DIRECTOR
 741.63.66 20.20 74.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
 08/07/23 12:53:35

Jair Sandroval Jerez
70.63.66 20.20 74.6.5.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
08/07/23 12:53:35

JEFF SANDROYAL DIRECTOR
 741.63.66 20.20 74.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
 08/07/23 12:53:35

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022**
SENTENCIA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de un acto de ejecución que no se reclama por vicios propios y, por tanto, sigue la misma suerte que el reclamo principal atribuido a la autoridad ordenadora.

De manera que, si en el juicio de amparo se concede o se niega la protección constitucional contra los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe regir el mismo sentido para los actos que tienen por objeto ejecutarlos, si no se reclaman por vicios propios, por ser consecuencia lógica de aquéllos.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia sin número de registro de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte- SCJN Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, página 1492, cuyo contenido es:

AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta.

Asimismo, la jurisprudencia sin número de registro del Pleno del alto tribunal, consultable en el

AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional.

En esa medida, al ser fundado el agravio hecho valer por el quejoso, debe declararse que en el caso no se actualizó la causa de improcedencia decretada por el juez en relación con el registro de la resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, emitida en el procedimiento administrativo [REDACTED] y, en consecuencia, lo procedente es **levantar el sobreseimiento** decretado y, una vez que se resuelva el fondo del asunto, se precisará el efecto que debe regir al acto de ejecución.

QUINTO. Estudio agravios de autoridad responsable y agente del Ministerio Público.

Para atender los agravios de las autoridades recurrentes, debe tenerse en cuenta que en el considerando quinto de la sentencia recurrida el juez

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022**
SENTENCIA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

centró el fondo del asunto en determinar qué legislación es la que debe regir la sustanciación del procedimiento de responsabilidad.

Verificó que el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve se emitió el acuerdo de inicio de investigación, el cual se sustanció en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, señaló que en la resolución reclamada la autoridad estableció la competencia, calidad del servidor público, calificación de la conducta, determinación de la responsabilidad y sanción en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mientras que la existencia de los hechos, valoración de pruebas y otras cuestiones procesales se realizaron en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Resolvió que, si el procedimiento administrativo [REDACTED] inició el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, esto es, durante la vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el procedimiento debió instruirse conforme a esa ley y no en la legislación abrogada, que fue en la que se fundamentó el acto reclamado, específicamente, en cuanto a la calificación de la conducta.

Half Survival Time:
70.65, 66.20, 20.74, 65.00, 60.00, 00.00, 00.00, 00.00, 00.00, 09.09, 0
08/07/23 12:53:35

Half Survival Time:
70.65, 66.20, 20.74, 65.00, 00.00, 00.00, 00.00, 00.00, 09.09, 0
08/07/23 12:53:35

VAS
S
LA

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Señaló que dicho criterio soluciona el problema jurídico planteado, en la parte que sostiene que el procedimiento administrativo y la calificación de la conducta se deben regir por la aplicación de la misma norma.

De ahí que al haberse fundado la resolución reclamada en una ley que no es aplicable, impactó en cuestiones relacionadas en lo procesal, como es la competencia, así como en el fondo del asunto, razón por la que se deberá precisar la conducta reprochada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual repercutirá en el órgano que deberá sustanciar y resolver el procedimiento de acuerdo con la gravedad de la falta administrativa y en el plazo para que opere la prescripción de las sanciones.

En consecuencia, declaró ilegal la resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte emitida en el procedimiento administrativo [REDACTED], alcanzada esa conclusión, determinó que era innecesario el estudio de constitucionalidad del artículo 13, fracción V, párrafos tercero y quinto, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por tratarse de una norma no aplicable en el caso.

1st 3rd 5th 7th 9th 11th 13th 15th 17th 19th 21st 23rd 25th 27th 29th 31st
 08:07:23 12:53:35

e tesis
cto que
plicado
del primer
ilustraciones

Detalla que, con base en esa legislación, se inició el procedimiento administrativo y se calificó la falta, pero lo relativo a la valoración de pruebas y cuestiones procesales se llevó a cabo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme al criterio de la contradicción de tesis 103/2020.

Concluye que es jurídicamente correcto que en el procedimiento administrativo se haya aplicado, por un lado, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que se encontraba vigente al momento en que ocurrieron los hechos (parte sustantiva) y, por otro lado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas que estaba vigente al momento de iniciar el procedimiento (parte adjetiva), motivo por el cual refiere que la

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022**
SENTENCIA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte se emitió correctamente, esto es, conforme a la segunda.

Para dar solución a esos planteamientos conviene tener en cuenta que en la contradicción de tesis 103/2020 la Segunda Sala del alto tribunal sostuvo que, de conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los procedimientos pendientes de resolución deben concluir con base en las leyes aplicables en su inicio.

No obstante, señaló que en las normas de tránsito de dicho decreto no se estableció cuál sería el ordenamiento aplicable para resolver las conductas posiblemente infractoras cometidas antes de la vigencia de la ley general, sobre las cuales no se hubiera iniciado la investigación correspondiente.

Reconoció que, si el artículo tercero transitorio en comento señala que sólo los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esa normativa se sustanciarán conforme a la ley anterior, no podía extenderse esa regla a los asuntos no iniciados, motivo por el que consideró que era válido llevar a cabo un procedimiento conforme a la legislación nueva, a pesar

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

de que la conducta se hubiere cometido con anterioridad a su entrada en vigor.

Detalló que no era viable pretender iniciar una investigación basada en una ley (Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), para que, conforme a los resultados, la sustanciación del procedimiento se realice basado en otra (Ley General de Responsabilidades Administrativas) conforme a la cual los aspectos sustanciales quedan definidos a partir de las actuaciones anteriores.

De ahí que lo procedente era que, si los **actos de índole adjetiva** en una etapa son llevados de acuerdo con las reglas de una ley, los subsecuentes deben estar regidos por la misma, en tanto aquéllos se verán reflejados en ésta y son un presupuesto de su finalización adecuada.

De manera que consideró que como los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas implican que el trámite sea uniforme, desde la investigación hasta la resolución y sus etapas no se puedan entender de manera aislada, el procedimiento al que se refirió el legislador en el transitorio se debía considerar iniciado con la

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

investigación para determinar la legislación aplicable en razón del tiempo.

Resolvió que, si la conducta se ejecutó antes del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, pero la investigación inició en esa fecha o en una posterior, el procedimiento debía seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De las consideraciones expuestas derivó la jurisprudencia 2a./J. 47/2020 (10a.), divulgada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, octubre de 2020, Tomo I, página 898, que establece:

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LA INFRACCIÓN HAYA OCURRIDO ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2017 SIN QUE SE HUBIERE INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, RESULTA APLICABLE PARA EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).

Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado de Circuito contendientes analizaron cuál legislación resulta aplicable para el procedimiento de responsabilidad administrativa si la conducta se ejecutó antes del 19 de julio de 2017, pero la investigación inició en esa fecha o en una posterior. Al respecto llegaron a soluciones contrarias, pues para el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el procedimiento

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito concluyó que la legislación aplicable para el procedimiento es la vigente en la fecha en que se cometió la conducta.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Justificación: La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue creada como un cuerpo normativo que busca englobar la totalidad de las actuaciones necesarias para determinar la existencia de causales de responsabilidad y, en su caso, sancionarlas, lo cual generó que las etapas procedimentales estuvieran enlazadas y tuvieran un efecto unas respecto de otras; la estrecha vinculación entre la fase de investigación y las posteriores, implica que el trámite sea uniforme, desde la investigación hasta la resolución, y sus etapas no se pueden entender de manera aislada. Ahora bien, de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los procedimientos administrativos iniciados antes del 19 de julio de 2017 deberán concluir según las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Sin embargo, si la conducta se ejecutó antes de esa fecha, pero la investigación inició con posterioridad a ella, el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la resolución será emitida por la autoridad competente.

De lo expuesto se desprende que en las disposiciones transitorias de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedó definido que a pesar de la abrogación de la Ley Federal de

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022**
SENTENCIA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las normas sustantivas de esa legislación continuarían siendo aplicables para juzgar los hechos irregulares que hubieran acontecido durante su vigencia, mientras que las normas procesales de esa ley serían aplicables para concluir los procedimientos administrativos que ya se hubieran iniciado.

En la resolución administrativa impugnada se concluyó que el quejoso infringió la obligación prevista en el artículo 8o, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Lo anterior, por haber omitido manifestar en sus declaraciones de situación patrimonial en sus modalidades inicial, presentada el **cuatro de noviembre de dos mil dieciséis**, así como las de modificación de **dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete**, únicamente por cuanto hace a las cuentas bancarias [REDACTED] 1470, [REDACTED] y [REDACTED] a nombre de [REDACTED] [REDACTED], reportado como su dependiente económico (hijo), sin que existiera una condición que lo eximiera de esa obligación.

En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 13, fracción V y párrafo tercero de la Ley

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se le impuso la sanción mínima consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de diez años.

De lo expuesto se desprende que el fondo de la causa involucró hechos irregulares realizados durante los años dos mil catorce a dos mil diecisiete, bajo la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que fueron juzgados conforme a esa legislación, la cual se considera que fue correcta la aplicación de esa normatividad.

De los antecedentes del asunto se advierte que la resolución sancionatoria combatida deriva del procedimiento de investigación que inició el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, con la emisión del acuerdo de esa fecha por el Director General Adjunto de Verificación Patrimonial adscrito a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De modo que también se considera correcta la determinación de la autoridad responsable de tramitar el procedimiento administrativo de

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022**
SENTENCIA

responsabilidades con sustento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues al haber iniciado la investigación con posterioridad al diecinueve de julio de dos mil diecisiete, el procedimiento se debe seguir conforme a esa norma.

En consecuencia, contrario a lo resuelto por el juez de distrito, no se configura la ilegalidad que refiere en la resolución reclamada de cuatro de diciembre de dos mil veinte, ya que no es correcto que en el caso la calificación de la conducta y el procedimiento deben regirse únicamente por la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Con base en lo establecido por la Segunda Sala del alto tribunal en la contradicción de tesis que se refirió, el procedimiento administrativo sancionatorio se rige por lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si la investigación se inició con posterioridad a su entrada en vigor, de lo contrario conforme a la legislación abrogada.

Mientras que los aspectos sustantivos, como la calificación de la infracción, se regulan conforme a la ley vigente al momento en que se perfeccionaron los hechos irregulares, ya sea con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De ahí que, como se verificó en el caso, las cuestiones procesales y sustantivas no deben regirse por la misma norma.

Por tanto, al ser fundado el agravio de la autoridad responsable se debe **revocar** la concesión del amparo en ese aspecto y con base en el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo, se estudiarán los conceptos de violación no analizados por el juez de distrito.

Finalmente, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado del conocimiento, en su recurso, expone que no es aplicable en el caso el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 47/2020 (10a) porque a la fecha en que se dictó el acuerdo de inicio de investigación (veintiocho de octubre de dos mil diecinueve), el de calificación de faltas administrativas y el informe de presunta responsabilidad administrativa (diecinueve de marzo de dos mil veinte), aún no se encontraba publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que fue el veintitrés de octubre de dos mil veinte.

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Motivos por los que considera que las resoluciones emitidas durante la sustanciación del procedimiento administrativo de mérito son legales.

El agravio debe desestimarse debido a que se plantea a partir de la decisión asumida en la sentencia recurrida, la cual en párrafos previos este tribunal resolvió que es incorrecta, porque en el caso se aplicaron las normas que deben regir las cuestiones adjetivas y sustantivas, que es acorde con el criterio sostenido por el alto tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 47/2020 (10a.), cuya aplicabilidad en la especie no depende de las fechas en que se emitieron los acuerdos que el recurrente refiere, sino cuando se inicie el procedimiento administrativo ante Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La misma decisión debe ser para el segundo de los agravios que el representante social hace valer, dado que en él controvierte el efecto que el juez fijó en la sentencia recurrida con motivo de la concesión del amparo; no obstante, esa determinación fue revocada al declararse fundado el motivo de disenso de la autoridad responsable recurrente.

En la ampliación de demanda de amparo el quejoso hace valer un concepto de violación que, de ser fundado, sería suficiente para concluir la ilegalidad del acto reclamado y otorgar la protección constitucional.

En el concepto de violación cuarto el promovente argumenta que el Director General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública no tiene competencia legal para resolver el procedimiento de responsabilidad, porque de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 47/2020 (10a.), al haber iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas debió ser resuelto por una autoridad distinta a la sustanciadora.

Indica que, en el caso, por tratarse de una falta calificada como grave, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Precisa que no era obstáculo a lo anterior, la consideración que la autoridad responsable expresó, en el sentido de que el tribunal competente ha

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

sostenido que no puede recibir los procedimientos derivados de sanciones no contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues a pesar de ello la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la aplicable en lo procesal, lo faculta para resolverlo.

Con el propósito de dar solución al planteamiento, se debe partir que como quedó establecido en líneas anteriores, en el caso el inicio del procedimiento de responsabilidad ocurrió con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en consecuencia, conforme a su artículo tercero transitorio son aplicables los aspectos procedimentales establecidos en los artículos 208 y 209 de esa legislación, que en la parte conducente indican:

Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos internos de control

Artículo 208. *En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:*

I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe;

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio;

III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre;

IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación;

V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley;

VI. Los terceros llamados al procedimiento de



AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos;

VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes;

[...]

Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los Tribunales

Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo.

Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones:

I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

domicilio del Tribunal encargado de la resolución del asunto;

II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el expediente respectivo a la Autoridad substanciadora que corresponda para que continúe el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior.

De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la Autoridad investigadora en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a la descripción de una falta grave diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres días hábiles. En caso de que la Autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad así lo hará saber al Tribunal fundando y motivando su proceder. En este caso, el Tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa.

Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su caso, se haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del expediente.

Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo;

III. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022**
SENTENCIA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

desahogar, el Tribunal declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes;

IV. Una vez transcurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello, y

V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

De los artículos preinsertos se desprende que la autoridad sustanciadora, luego de haber concluido la audiencia inicial en el procedimiento administrativo de responsabilidad, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes, debía remitir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los autos originales del expediente administrativo, notificar a las partes la fecha de su envío e indicar el domicilio del tribunal encargado de la resolución del asunto.

Sin embargo, de la revisión de los autos de origen se advierte que por acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte, el Director General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la

Igor Santovyal Bimenez
70.66.66.20.70.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
08/07/23 12:53:35

Igor Santovyal Bimenez
70.66.66.20.70.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
08/07/23 12:53:35

for Santovni Perez
70.66.66.20.70.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
08/07/23 12:53:35

for Santovya Jimenez
70.66.66.20.70.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
08/07/23 12:53:35

Igor Santovyal Bimenez
70.66.66.20.70.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
08/07/23 12:53:35

**AMPARO EN REVISIÓN 100/2022**
SENTENCIA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

dos mil veinte, que es el acto reclamado, la autoridad responsable justificó su competencia en los mismos términos que en el auto referido, por lo que declaró ocioso el envío de los autos del expediente de responsabilidad administrativa 73/2020 a la Sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues, además, existía jurisprudencia vinculante de ese tribunal en la que se circunscribió su competencia a que los procedimientos tengan sustento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que se trate de conductas graves previstas en esa ley.

Contrario a lo que el Director General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública resolvió, si en el caso la falta administrativa que se le imputa a la parte quejosa fue calificada como **grave**, con base en lo dispuesto en los artículos 8o, fracción XV, y 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos abrogada, la competencia para dictar la resolución no se surte a favor de dicha autoridad, sino del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a pesar de que éste haya establecido que sólo es competente para conocer de los procedimientos cuyas conductas graves estén previstas en la Ley General de

Responsabilidades Administrativas.

Lo anterior, porque no es jurídicamente posible que en la especie deba prevalecer la jurisprudencia VIII-J-1aS-49 de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de rubro: "COMPETENCIA MATERIAL DE LA DÉCIMO TERCERA SALA REGIONAL METROPOLITANA Y AUXILIAR EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS GRAVES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA - SE CIRCUNSCRIBE ÚNICAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS", como la autoridad responsable lo sostuvo en su resolución.

Ello, porque el artículo 79 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es obligatoria para sus Salas, siempre y cuando no sean contrarias a las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, si se demostró que al caso es

AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución, consistente en la inscripción de la resolución reclamada en el Registro Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos Sancionados.

Alcanzada esa conclusión, es innecesario el estudio de los conceptos de violación restantes, ya que su examen no variaría la decisión.

Es aplicable la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Cuarta Parte, página 72, que establece:

CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:



AMPARO EN REVISIÓN 100/2022
SENTENCIA

PRIMERO. Se **MODIFICA** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** a _____ contra la resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, emitida en el expediente administrativo 73/2020 y su ejecución.

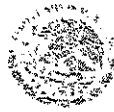
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Ronzon Sevilla (Presidente), Juan Carlos Guzmán Rosas y Antonio Campuzano Rodríguez, lo resolvió este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados. Firman los Magistrados integrantes, con el Secretario de Tribunal Jair Sandoval Jiménez, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

CARLOS RONZON SEVILLA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Antonio Campuzano Rodríguez		Validez:	BIEN
				Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0a.37		Revocación:	Bien
Fecha: (UTC / CDMX)	06/09/22 19:08:01 - 06/09/22 14:08:01			No revocado
Algoritmo:	RSA - SHA256		Status:	Bien
				Valida
Cadena de firma:	d4 cf a2 10 2e 47 64 ac 49 27 3e c1 e4 88 7f ae 93 be 04 39 35 e8 f2 7a 4b 7f ce ff 30 37 ea 6e b4 41 7a 5e 41 0e 22 89 52 b8 4a 47 10 78 be d5 69 db 4d 26 2f 3e a7 d7 19 82 05 49 45 d0 8e 4f d5 53 ce e9 ee 2a 8f 93 ee 64 3c 2e 88 0f d7 14 fd 70 c1 2b 28 28 ad 08 14 4f aa f0 33 7d ab fb 21 e8 7d 3b 8f 14 33 bd f5 43 d6 b4 48 4d 0d 59 30 c7 8a 2d e3 b7 65 a3 59 cd 81 34 f3 3a 24 23 ea 54 4a 77 b9 08 22 f7 89 d2 67 ee ef 3e 82 ad 54 de ef e6 3f 7c ad b9 b6 a3 e7 ff 24 4c 34 63 d2 ff da c4 95 82 9e 87 43 f5 ac 64 34 2c 8f 73 9c 1e 4b 59 db 9a 8c 63 2e 10 45 08 5f 08 b0 3e 53 04 4b 36 bd 82 0b 69 3d 08 90 93 e2 5c bd 56 c1 05 8e 8d 08 d0 bc 78 72 9b 46 61 39 9d 8f 87 9d 71 b6 b5 99 86 bd ba 19 90 d1 f7 f7 d0 e7 9d 9b 97 b1 88 35 1d 00 b6 1d 7b 8d 51 a3 e5 ab			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	06/09/22 19:08:01 - 06/09/22 14:08:01			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	06/09/22 19:08:01 - 06/09/22 14:08:01			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	135725053			
Datos estampillados:	Sq9ll4MXEpp3MgipYV3D/BIQQ=			

YYaO2ICQGM0Ts+bVJhEQMSYVOA6mRZN1gYX+6DdJm14=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	CARLOS RONZON SEVILLA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.66.9e	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC / CDMX)	07/09/22 15:21:48 - 07/09/22 10:21:48	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	72 41 b 2e ef 42 6b 95 e9 d3 39 6f 93 90 f1 02 87 bc 06 07 48 03 c4 57 4f b2 02 19 5a 28 8e 35 04 ef 24 06 48 15 b7 5e 51 a9 c1 3c 63 7b 08 2c 5a 03 2c 64 4d 24 44 ec 06 36 16 47 f4 7e d2 98 0e 13 8b 6a a8 66 bc 5f 3f e5 ca 26 71 7c c1 d9 97 0d 7d 6f 49 4d 27 d3 25 5e 7e 1f aa 62 d5 5b 60 41 57 a8 e7 74 3c ba 52 ab 60 6f a2 2f 18 e5 03 e9 a5 4c ca 98 fd 52 df 84 a8 5a c9 26 8b 65 fd cf b7 a0 85 d8 fd 97 0b 3f 74 c9 60 15 9d ca 42 09 61 41 9b c9 73 8a 6a a8 44 a6 12 da 2f b2 61 03 b2 33 03 b4 13 69 c5 a9 14 c9 7b 92 2b f5 0c 6b 36 02 2f 73 09 18 29 0a 88 ab 93 61 a2 bb 95 c5 8c 8b 1a ec 5c 45 c3 ef ed f2 58 a5 35 39 70 63 c5 70 5c 5a 29 a4 85 27 55 d1 0f 07 9d 9f 71 41 69 92 d9 ac db 71 15 b5 65 09 cf 2d 67 34 9a 98 a5 5f b9 6f 0d fa ed 22 42 62 26 ec 47			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	07/09/22 15:21:48 - 07/09/22 10:21:48			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	07/09/22 15:21:48 - 07/09/22 10:21:48			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	135927102			
Datos estampillados:	zYUUh7k9h9+N4Q15zBy4BhDOx0=			

JAIR SANDOVAL JIMÉNEZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL DEL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE ES IMPRESIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, QUE OBRA DEBIDAMENTE FIRMADA DE MANERA DIGITAL EN LOS AUTOS DEL AMPARO EN REVISIÓN 100/2022, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1069/2020, PROMOVIDO POR EN CINCUENTA PÁGINAS, DEBIDAMENTE SELLADAS, COTEJADAS Y RUBRICADAS Y SE EXPIDE PARA SER REMITIDAS COMO TESTIMONIO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DOY FE.

CIUDAD DE MÉXICO, A SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS

SECRETARIO DE TRIBUNAL

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

JAIR SANDOVAL JIMÉNEZ

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

VYao2ICQGM0Ts+bVJhEQMSYvOA6mRZN1gYX+6Ddjm14=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JUAN CARLOS GUZMÁN ROSAS	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.0d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/09/22 17:54:06 - 06/09/22 12:54:06	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	0c be d6 85 87 53 57 dc ed fd 97 22 db d4 32 00 d9 b7 38 0d 43 2d cb 31 48 ef 1c 2c f9 39 7b ed 00 b4 0e e0 c6 b2 92 fd 81 c0 58 43 4e 18 ba 5a f6 01 6c 1c 70 4b 1f f3 e5 de 7d 4a c2 c8 2b 3e e6 aa 2d 9a 6a 66 97 72 f9 e4 0e e7 ce 41 38 24 32 a4 59 df 13 1b 0d 3b 05 00 ec 54 a1 47 a1 4f 66 1a 0b 28 81 1c ba 04 ec b3 2a 97 4c 27 75 56 ea 15 f9 b1 c7 79 5f e3 6c 57 17 ed 83 a0 6f 16 ea 71 cf 14 a3 64 c0 2c 20 9d 42 38 39 64 00 c4 1e ee bb 82 e9 22 bf 55 34 1d 4c 84 53 8b ee 00 24 0b 64 ef 21 52 08 5e a5 96 6c 6c 57 61 0a 02 d5 9f 64 66 53 6c 4c 7c e0 8b e8 af af a7 e7 40 be ee 73 55 7c d8 e7 d5 6a 95 11 24 03 d8 b8 b0 20 d6 d4 b4 69 84 b1 1b 7d 11 e0 24 8e c7 75 d8 46 ba d6 bf 97 2c 42 59 79 e4 97 70 cb cf b6 f7 68 65 94 0e 4d e1 1a d6 a3 05 3e b6 1e d4 d3 76			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	06/09/22 17:54:06 - 06/09/22 12:54:06			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	06/09/22 17:54:06 - 06/09/22 12:54:06			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	135689021			
Datos estampillados:	Y9ZgG5nbsGVr0/njzBr3nixKsdI=			

